



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: RAÚL ERNESTO CASTRO HOYOS  
Demandados: ACP COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 010 2020 00226 01  
Sentencia: S-177

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver **el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, y en grado jurisdiccional de consulta a favor de esta última entidad**, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de noviembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

RAÚL ERNESTO CASTRO HOYOS demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia y/o nulidad de la

afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, bonos pensionales y demás conceptos a los que haya lugar. Y que se declare que tiene derecho a la pensión de vejez por cumplimiento de los requisitos bajo la ley 100 de 1993. Pretende además se condene en costas a las demandadas.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPMPD- a partir del 24 de agosto de 1982, con cotizaciones hasta el 30 de septiembre de 2002, reuniendo un total de 522.14 semanas; que nació el 16 de mayo de 1958, y actualmente cuenta con 1.302 semanas; que se trasladó a HORIZONTE el 19 de septiembre de 2002, debido a que unos funcionarios del fondo privado los reunieron donde estaban laborando, en donde no les brindaron una asesoría adecuada, pues tan solo le manifestaron que tendrían mayor rentabilidad y sin explicarle que al tener beneficiarios su pensión se vería afectada; que se trasladó a PORVENIR S.A. el 30 de enero de 2005, sin brindarle mayor información al respecto; que nunca se le explicó de las ventajas o desventajas de trasladarse de régimen; que a principios del año 2020, solicitó la proyección de la pensión al fondo privado, obteniendo un salario mínimo legal, la cual sería mayor en el RPMPD; y que el 6 de julio de 2020, solicitó el traslado a COLPENSIONES, el cual fue resuelto negativamente.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al ISS, el traslado al RAIS y la solicitud de traslado radicada ante Colpensiones, sobre los demás hechos indica que

no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que el traslado de régimen se hizo en debida forma y el actor obró libremente en ejercicio de su derecho de elección. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de cusa para pedir, ausencia de prueba de engaño, equivocada información y perjuicio padecido, indebida aplicación de carga probatoria, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad de condena en costas, compensación y presunción de legalidad de los actos jurídicos.

PORVENIR S.A. en su contestación de demanda, expone que no le consta la afiliación al ISS ni la fecha de nacimiento; que la afiliación al RAIS el 30 de junio de 2002, fue libre y consciente luego de habersele informado de manera, clara, precisa, veraz y suficiente de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993; que al demandante se le garantizó el derecho de retracto; que si se le informaron las características del RAIS; y que no le constan los hechos que van dirigidos en contra de COLPENSIONES. Se opuso a las pretensiones de la demanda, ya que al actor se le brindó información de manera clara, precisa, veraz y suficiente de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993. Como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia del cambio de régimen pensional realizado del RPM al RAIS y en consecuencia declaró que el actor permaneció afiliado al RPM sin solución de continuidad; **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a trasladar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia a COLPENSIONES el saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, frutos e intereses, bonos pensionales si los hubiere, el

porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos de administración, seguros previsionales y reaseguro, debidamente indexados; **ORDENÓ** a COLPENSIONES , que reciba de PORVENIR S.A., los valores aludidos e incorporarlos como semanas válidas en la historia laboral del actor, imputándolos a los períodos en que fueron cotizados en el RAIS y de acuerdo al IBC que fueron aportados; **CONDENÓ** a COLPENSIONES, a reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez a partir de la última cotización que se registre en el sistema pensional o a partir de la novedad de retiro, debiéndose pagar el retroactivo indexado y con los descuentos en salud; y **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación manifestando que el demandante no es la parte débil del sistema de seguridad social, y por el contrario con la ineficacia declarada se está afectando la sostenibilidad financiera del sistema, pues el actor no soporta el vicio del consentimiento para que pueda darse la declaratoria y como consecuencia generar la carga a COLPENSIONES del pago de la pensión de vejez, debiendo ser PORVENIR S.A. la que debe asumir dicha carga y toda la situación personal del demandante; y que en caso tal de que se llegue a confirmar la decisión, se exonere a esta entidad de la condena en costas.

Por su parte, la apoderada de PORVENIR S.A. presenta recurso de apelación respecto de las condenas impuestas a esta entidad, toda vez que no se debe aplicar el precedente de manera objetiva, sino que debe ser analizado de acuerdo a cada caso en concreto, no siendo procedente trasladar los conceptos ordenados por el juez; y que al ordenar los rendimientos financieros este rubro es excluyente con la indexación, pues se considera que es una doble condena, por lo que se solicita

revocar la decisión de primera instancia y absolver a la entidad de toda condena.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales expuso que se debe revocar la sentencia de primera instancia, pues se afecta la sostenibilidad financiera del sistema, y además no era posible el traslado conforme a la prohibición legal con sagrada en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 2 de la Ley 797 de 2003; que el demandante nunca demostró que ejerció de manera oportuna las acciones jurídicas tendientes a regresar al Régimen de Prima Media; y que en caso de confirmarse la decisión, solicita se traslade la totalidad de las cotizaciones, debidamente indexadas.

Finalmente, el apoderado de la AFP PORVENIR S.A. presentó sus alegatos de conclusión solicitando que no se declare la ineficacia del traslado, ya que no se probaron que el acto no goce de plena validez; que si se le garantizó el derecho de retracto y el derecho a la libre escogencia; que siempre se le garantizó el deber de información, cumpliéndose con la carga procesal, sin podersele imponer otra carga probatoria; que se debió realizar un análisis crítico de todas las pruebas; que este fondo privado siempre actuó de buena fe; y que las condenas impuestas no deben ser indexadas.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por COLPENSIONES y la AFP PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia e igualmente conocer del proceso vía grado

jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** RAÚL ERNESTO CASTRO HOYOS nació el 16 de mayo de 1958; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 24 de agosto de 1982; **iii)** el 19 de septiembre de 2002<sup>1</sup> suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A.; **iv)** y el 30 de enero de 2005<sup>2</sup> se trasladó a PORVENIR S.A. entidad en la que se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

---

<sup>1</sup> Folio 39 del PDF 06

<sup>2</sup> Folio 43 del PDF 06

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>3</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida

---

<sup>3</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;



- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, su traslado a HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. en el año 2002, obedeció a unos contratos que estaba celebrando con la Asamblea Departamental de Antioquia como comunicador y relacionista público, en donde se hizo una reunión, en la cual le explicaron algunos de los beneficios que tendría con el traslado, ya que el ISS estaba en una crisis, optando por el traslado; que los beneficios que le manifestaron es que tendría una pensión más firme que la ofrecida por el ISS, y que estaría más seguro que con el fondo del gobierno; que si le realizó

preguntas al asesor en el sentido de que como seguía la situación con COLPENSIONES, pero éste le manifestó que estaría con mejores beneficios en el fondo privado; y que se trasladó a PORVENIR S.A. en el año 2005, cuando laboraba en la Contraloría de Envigado, en donde se le entregó una información pero no muy profunda de los beneficios del traslado, sin explicarle las modalidades pensionales ni el monto con que se podría pensionar.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Ahora. No es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía

de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

En cuanto a los traslados que realizó el demandante dentro del mismo RAIS, debe indicarse que esto no demuestra que el actor quiso pertenecer siempre a este régimen, pues es claro que lo que debe mirarse, es la falta de información inicial, tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo que *"... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad"*.

En lo que tiene que ver con el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, no podrá salir adelante, toda vez que frete a este tema la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a trasladar**

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y

SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene la apoderada de PORVENIR S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria

de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... *todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.*”

En lo que tiene que ver con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será ***precisada***.

### **Pensión de vejez**

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el demandante acredita todos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido 16 de mayo de 1958, significa que los 62 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2020.

De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones a PORVENIR S.A. actualizado hasta el mes de diciembre de 2019, se evidencia que el actor acreditaba, para ese entonces, un total de 1.212 semanas cotizadas en toda su vida laboral que, sumadas a los períodos cotizados con el Departamento de Antioquia del 20 de octubre de 1988 al 4 de diciembre de 1991 y del 5 al 6 de diciembre de 1991<sup>4</sup>; con el Senado de la República del 19 de agosto de 1994 al 19 de julio de 1998<sup>5</sup>; y con

---

<sup>4</sup> Folios 23 a 26 del PDF 06

<sup>5</sup> Folios 28 a 31 del PDF 06

TeleAntioquia entre el 16 de febrero de 1987 al 24 de octubre de 1988<sup>6</sup>, el demandante logra cotizar un total de 1.420.29 semanas, las que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal, por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez se encuentra ajustada a derecho.

Sin embargo, en lo que tiene que ver el disfrute de la prestación, aplica la necesidad ineludible en casos como este de acreditar la desafiliación del sistema. Incluso, el fundamento para adoptar esa decisión no son solo los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que esas cotizaciones que se vienen realizando pueden tener incidencia en el valor final de la prestación que se va a reconocer, en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Lo anterior debido a que es claro que de la historia laboral se desprende que en la actualidad continúa realizando cotizaciones, por lo que le corresponderá a COLPENSIONES, cuando tenga los dineros de la cuenta individual que el demandante posee en PORVENIR S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación una vez se acredite el retiro, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es con el promedio del IBL de toda la vida laboral o de los últimos 10 años efectivamente cotizados, según le sea más favorable; confirmando igualmente la indexación del retroactivo pensional si existiere o los descuentos respectivos en salud.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y PRECISADA.**

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1`160.000.

---

<sup>6</sup> Folios 131 a 133 del PDF 12.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de noviembre de 2022, pero **PRECISANDO** que en el caso de que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor del demandante, la devolución del importe respectivo debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor del demandante. Como agencias en derecho se fija \$1`160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral



**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab98a5b8ee3dedfa6bbfcdc90aed8b5616678615b17d281c0ddf01628a087fbe**

Documento generado en 22/06/2023 03:33:58 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**